

PASTO, NARIÑO

2.000 paramilitares activos en Nariño

Nueve meses después de la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur de las autodefensas, en Nariño persiste la actividad paramilitar bajo nuevas denominaciones: Mano negra, Hombres de negro, Águilas negras, Organización Nueva Generación y Los Rastrojos.

Por Juan Diego Restrepo (Agencia de prensa IPC)

Los nariñenses confiaron en el proceso de desmovilización del Bloque Libertadores del Sur en julio de 2005. Pero días después las ilusiones fueron trastocadas por la decepción. Pobladores de municipios como Policarpa, Leiva, El Rosario y Cumbitara, en la región central, y de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, en el eje vial hacia la llanura del Pacífico, comenzaron a ver hombres armados, muchos de ellos ya conocidos desde antes de la desmovilización.

Unos hablan de falsos procesos de desmovilización y de intensos procesos de reclutamiento; otros, de incumplimientos por parte del Estado. El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior se defiende, y señala que son grupos al servicio del narcotráfico que se hacen pasar por autodefensas para evitar la extradición (ver respuesta del gobierno).

“No entiendo por qué si el 30 de julio de 2005 se desmovilizaron 677 hombres del bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas, hoy hay más de 2.000 paramilitares activos en todo el departamento. Eso no es un proceso que conduzca a soluciones de fondo. Creo que se les está mintiendo al país y al departamento”, afirma Néstor Montilla, asesor de Paz de la Gobernación de Nariño.

Nueve meses después de los actos de desmovilización, en Nariño persiste la actividad paramilitar bajo nuevas denominaciones: Mano negra, Hombres de negro, Águilas negras y Organización Nueva Generación, así como de Los Rastrojos, que actúan bajo el mando de Wílber Varela, capo del cartel del Norte del Valle solicitado en extradición por Estados Unidos.

“Si se mira bien, ese proceso va por mal camino. La presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se ve por todo el departamento. Yo discrepo de quienes dicen que en Nariño hay nuevos grupos. Los paramilitares no han vuelto por una sencilla razón: nunca se fueron, se quedaron”, advierte Montilla.

Entre otras cosas se quedaron y lograron aumentar su número porque, según denuncias que reposan en las oficinas de las autoridades nariñenses, dos meses antes de la fecha de desmovilización, las Auc reclutaron cerca de 400 jóvenes en Pasto y en los municipios bajo su dominio territorial, quienes debían concentrarse un mes antes de la fecha de dejación de armas a cambio de 18 meses del auxilio económico ofrecido por el gobierno nacional.

En síntesis, se desmovilizaron los nuevos reclutas más un grupo mínimo de antiguos combatientes del Bloque Libertadores del Sur (BLS), pero dejaron intacta y operando la fuerza paramilitar real en dos zonas clave: la llanura pacífica, con Tumaco y el corregimiento Llorente como centros de operaciones, y el norte del departamento, en el área comprendida por los municipios de Rosario, Leiva, Cumbitara y Policarpa.

Aparecen lentamente

“En Nariño le están jugando sucio a la vida”, afirma una fuente gubernamental que solicitó la reserva del nombre. Las denuncias sobre acciones paramilitares en diversas regiones del departamento comenzaron justo una semana después de la desmovilización. Sin embargo, quienes se atrevieron en ese momento a denunciar los hechos en reuniones con autoridades civiles y militares, fueron calificados de “terroristas”.

Sus apreciaciones se basaban en datos entregados por las comunidades que advirtieron que el propio Álex Medellín, uno de los comandantes del BLS, anunció días antes de su desmovilización, a través de una emisora radial de las Auc, que un lugarteniente suyo, un ex policía conocido con el alias de ‘Pedro’, quedaría al mando de por lo menos 60 hombres.

Con el paso de los meses, se reforzaron las versiones. En octubre se supo de la presencia de un comando armado paramilitar llamado Los Rastrojos en el eje vial Tumaco-Junín-Barbacoas y las zonas ribereñas del río Patía. En noviembre, la comunidad Awá del corregimiento Junín, de Barbacoas, denunció la presencia de ese grupo en sus territorios: “son los mismos hombres que estaban antes de la desmovilización”, dicen las autoridades indígenas.

En diciembre, las autoridades del municipio de San Pablo alertaron sobre la presencia de paramilitares en la localidad, bajo el nombre Nueva Generación. Allí, dos meses antes, se conocieron amenazas escritas de las Auc contra la Asociación Agroambiental de la localidad.

Los pobladores de Policarpa, localidad nariñense enclavada en la montaña, a 125 kilómetros de Pasto, tienen fresco en su memoria el arribo de Nueva Generación a la localidad: el 6 de diciembre llegaron a Sotomayor, luego pasaron por Pisanda y se instalaron en los corregimientos de El Ejido y Madrigal. El hecho lo confirma la misma Policía del lugar, que aclara que “son una disidencia del Bloque Libertadores del Sur”.

Entre enero y febrero de 2006 se incrementaron las muertes selectivas por sicariato en Pasto, 28 en total, atribuidas al fenómeno paramilitar; así como las amenazas de muerte y el cobro de ‘vacunas’ a comerciantes y transportadores en varios municipios nariñenses.

En febrero, dos maestros del Sindicato del Magisterio de Nariño de los municipios de La Tola y Roberto Payán fueron amenazados. En ese mes, y no obstante haberse desmovilizado, Álex Medellín, de origen antioqueño, regresó a Policarpa. “Se hospeda siempre en el hotel Carretero y lo cuidan unos 30 hombres armados. El hotel queda cerca de la estación de la Policía”, asevera una fuente estatal.

Pero lo que en un comienzo se consideró como pura especulación, se convirtió en una evidencia incuestionable. En el sexto informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA), presentado en Washington el 1º de marzo de este año, se expresó la situación de Nariño.

“[...] fue posible verificar la existencia de un grupo conocido como Mano Negra o Águilas Negras, cuyo centro de operaciones es el corregimiento de El Palmar, municipio de Leiva y que se extiende hacia las veredas Esmeraldas y La Sierra del municipio de El Rosario, el corregimiento de Remolino del municipio de Taminango (Nariño), y posiblemente en los municipios Mercaderes y Balboa (Cauca). Este grupo opera en el área de influencia del ex Bloque Libertadores del Sur, que estaba adscrito al Bloque Central Bolívar (BCB). Este grupo estaría conformado por un número de hombres que oscila entre 80 y 150. Están en proceso de reclutamiento de nuevos combatientes, tanto de desmovilizados como de población de la zona”.

Hay más datos

Otras evidencias llegan en pequeños relatos. El pasado 23 de marzo, una comisión mixta conformada por funcionarios de los gobiernos nacional y departamental, y de una organización no gubernamental, viajaba del municipio de Barbacoas a Tumaco, a través del río Patía, cuando fueron requeridos por hombres armados ubicados en la rivera del afluente. Eran 12 hombres vestidos con camisetas negras y pantalones camuflados. Portaban fusiles y explosivos. Le pidieron al lancharo que los llevara aguas abajo hasta Bocas de Guandipa. Al llegar al caserío, los esperaban cerca de 50 hombres de Los Rastrojos.

A comienzos de abril, en el municipio de Policarpa, un comandante paramilitar conocido con el alias de ‘Jhonny’, quien está al frente del grupo Nueva Generación, en el corregimiento Madrigal, les notificó a los transportadores de pasajeros que debían aumentar la “vacuna mensual” de dos a seis millones de pesos.

En Tumaco, un viejo líder campesino expresó su preocupación por los asesinatos de jóvenes que vienen ocurriendo en las últimas semanas en zonas rurales a manos de un grupo que se hace llamar GLS (Grupo de Limpieza Social). Entre el 8 y el 9 de abril enterraron siete muchachos en el cementerio de esa localidad nariñense.

Esta suma de hechos llevó a varios funcionarios de la Gobernación y a líderes sociales nariñenses a concluir que la desmovilización no tuvo ningún resultado. “Fue una fachada para legalizar sus acciones contra las comunidades. Ahora son asesinos a sueldo del Estado, que salen cada mes a cobrar la ayuda del gobierno y retornan al campo a seguir matando”, dice con rabia un comerciante de Policarpa, cansado de pagarles extorsiones cada mes y cansado también de denunciar la situación ante las autoridades, sin resultados concretos.

Pero los desmovilizados también están inconformes. Durante una reunión realizada a comienzos de abril en la Gobernación de Nariño, un hombre identificado como Juan Carlos, comandante militar del Bloque Libertadores del Sur, conocido con el alias de ‘JC’ y de origen antioqueño, fue enfático en advertirles a las autoridades regionales que ni el

gobierno nacional ni el Alto Comisionado para la Paz les han cumplido, y afirmó que había regresado a Nariño a coordinar a sus hombres, muchos de los cuales, según él, “regresaron a las montañas”.

Lo que pretenden los paramilitares, de acuerdo con fuentes gubernamentales consultadas, “es preservar el control del mercado de la droga que detentaba el desmovilizado Bloque Libertadores del Sur”, y coinciden en admitir que “estas actividades ilícitas se hacen con la complacencia de la fuerza pública”.

Se sabía desde 2003

Lo que viene ocurriendo en Nariño desde el 30 de julio de 2005 ya había sido advertido por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en un informe subregional de riesgo fechado en enero de 2004 y que no fue dado a conocer por la entidad.

“El escenario tendencial que se configura es que la concentración de una parte de los combatientes estaría acompañada del copamiento territorial por combatientes del mismo Bloque Libertadores del Sur que no se articulan al proceso (de desmovilización) y por parte de unidades pertenecientes al Bloque Central Bolívar, cuya presencia ha sido menos perceptible en el departamento”, afirma el SAT en el informe.

Y agrega: “Ello se explica por varios factores: de un lado, se ha venido produciendo una descentralización del Bloque Central Bolívar en contingentes que buscan garantizar o lograr el control de las zonas de producción de cultivos de uso ilícito y las rutas de embarque (ver artículo sobre la coca); de otra parte, el carácter gradual del proceso de desmovilización está acompañado del copamiento de los territorios donde se tiene hegemonía por otras unidades militares como una forma de garantizar su seguridad; por último, dado que la disputa por el control del circuito de cultivos está aún en curso y es central al financiamiento de la guerra, lo que produce es un relevo militar que no deja espacios vacíos”.

El informe del SAT coincide con la afirmaciones del Asesor de Paz de la Gobernación de Nariño: “Los paramilitares no han vuelto, por una sencilla razón, nunca se fueron, se quedaron”.

Pero tras las realidades bélicas de Nariño, que se ven agravadas por el desplazamiento masivo y las víctimas de las minas antipersonales (ver artículo sobre las minas), también hay expresiones de resistencia civil que pretenden hacerle frente a la confrontación armada. En Samaniego, localidad en la que sus autoridades y habitantes, trabajan desde hace tres años en su Pacto de Local de Paz (ver artículo sobre Samaniego). Allí le apuestan a un modelo en el que prime el respeto por la población civil y el derecho a gobernar sin presiones. Algo que se requiere en Nariño con particular intensidad.

PASTO, NARIÑO

Minas antipersonas y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Nariño vive una crisis humanitaria sin precedentes, que se deriva del incremento en la siembra de minas antipersonales, de los accidentes causados por las mismas y de la persistencia del desplazamiento forzado producto de los combates entre los diferentes grupos armados legales e ilegales.

Por Juan Diego Restrepo

“Estamos en guerra” dice, sin dudar, María Gines Quiñónez, coordinadora para el departamento de Nariño de la Campaña Colombiana Contra Minas. Desde su punto de vista, esa situación se evidencia con dramatismo en la crisis humanitaria que se deriva del incremento en la siembra de minas antipersonales, de los accidentes causados por las mismas y por la persistencia del desplazamiento forzado derivado de los combates entre los diferentes grupos armados legales e ilegales.

En los primeros cuatros meses de este año, las víctimas registradas ascienden a 32 frente a 29 ocurridas en 2005. En la instalación de estos artefactos están comprometidos el ELN y las Farc.

Según la campaña, los municipios más afectados en términos de accidentes causados por minas son Samaniego, Sotomayor, Policarpa, Barbacoas y Cumbal. En términos de campos minados, la situación de riesgo se localiza tanto en estas localidades como en Roberto Payán, Maguí Payán, Ipiales y Puerres. A raíz de los combates en las últimas semanas en la zona del Bajo Patía, la comunidad ha informado la presencia de esos artefactos explosivos.

Como la situación es de guerra, de lo que se trata fundamentalmente, según Quiñónez, es de realizar un trabajo de prevención dirigido a preparar a la gente sobre cómo actuar en caso de riesgo por la existencia de campos minados.

“Igualmente, son necesarios mayores esfuerzos por parte de la Fuerza Pública en el desminado humanitario o barrido después de los combates, un compromiso de los actores irregulares para cesar la siembra de minas, además de la implementación de programas integrales de cuidado y rehabilitación de los sobrevivientes y de tratamiento de las consecuencias socioeconómicas en las zonas de riesgo”, concluye María Gines Quiñónez.

Crece desplazamiento

En lo que va de 2006 se han detectado varios casos. Uno de ellos tuvo lugar del 10 al 16 de enero de 2006, afectando comunidades negras y pertenecientes al Consejo comunitario ACAPA localizadas en San Pedro del Vino (Francisco Pizarro) y Bocas de Guandipa (Mosquera).

Los combates registrados entre el 19 y 22 de febrero entre el ELN y grupos paramilitares en Sotomayor dieron lugar al desplazamiento de 116 familias.

Durante el mes de abril y como producto de los combates en Policarpa, se ha detectado el desplazamiento de 100 familias al corregimiento de Ejido, 60 a la cabecera municipal y

123 a la ciudad de Pasto, las cuales no se han registrado por temor a no poder volver a sus tierras. Estos últimos enfrentan como dificultad adicional para que reconozca su situación de desplazamiento el hecho de provenir de zonas cocaleras.

Según las estadísticas de Acción Social, a 31 de enero de 2006, el municipio de Tumaco es uno de los principales expulsores con 7.249 personas, seguido por El Charco y Barbacoas. Dentro de los principales receptores se cuentan Pasto y Tumaco. Sin contar los problemas de subregistro, el total de personas en situación de desplazamiento en Nariño ascendía para esa misma fecha a un total de 37.427.

PASTO, NARIÑO

Cultivos ilícitos alimentan el hambre y la guerra

El telón de fondo de esta discusión es un cuadro cocalero de grandes proporciones: se calcula que en Nariño hay cerca de 55.000 hectáreas sembradas con matas de coca. Las actividades de narcotráfico son intensas y sus ganancias alimentan la maquinaria de guerra que tienen allí tanto paramilitares como guerrilleros. Paradójicamente, también alimentan el hambre de los labriegos.

Por Juan Diego Restrepo

“¿Será que podremos volver a sembrar coca? ¿Usted qué opina?”, le pregunta Lucía* al conductor de la camioneta Toyota cuatro puertas que presta el servicio de transporte de pasajeros entre Pasto y Policarpa. El hombre mira a la anciana y se encoge de hombros. Prefiere guardar silencio y concentrarse en la carretera destapada para evitar los huecos. La señora no repite la pregunta. Los cuatro pasajeros que viajan con ella guardan silencio.

Las preocupaciones de Lucía llegaron con el mes de abril, cuando arribaron a esta localidad 50 erradicadores manuales, protegidos por la Policía Antinarcóticos, con la tarea de arrancar por lo menos 300 hectáreas sembradas con matas de coca. Ella sabe que esa solución traerá más pobreza a la región, pues allí, como en muchas otras poblaciones de Nariño, abandonaron los cultivos de café, caña de azúcar, árboles frutales y hortalizas, para dedicarse a la hoja de coca.

Si bien es cierto que en la región se cultiva la hoja desde los años 80, las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito en el departamento de Putumayo en el año 2000 ocasionaron desplazamiento e incremento de la siembra, procesamiento y comercialización de cocaína en tierras nariñenses. El problema es gran magnitud: el Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 reporta 55.000 hectáreas dedicadas a la siembra de coca. Hoy, Nariño, es el principal productor de la hoja en Colombia.

El área rural de Policarpa es un ejemplo de lo que ocurre en el departamento. Allí, más del 50% del territorio está sembrado de coca. Por su extensión, sobresalen las plantaciones de los corregimientos Ejido, Madrigal y Sánchez, cercanas al río Patía, ruta fluvial navegable que lleva al Pacífico directamente.

Cinco kilómetros antes de llegar al casco urbano, Lucía se apea del vehículo, atraviesa la carretera y se pierde de vista entre varias casas. En ese momento, una camioneta Land Cruiser pasa rauda hacia Pasto. Lleva una decena de pasajeros y en el capacete, maletas y enseres domésticos. Minutos más tarde pasan dos más.

“Son campesinos que están saliendo de Sánchez y Madrigal porque el Ejército está fumigando y bombardeando desde los primeros días de abril”, explica un transportador, lo que revela una de las duras facetas del conflicto: con el aumento de las plantaciones de hoja de coca, en parte impuestas por las Auc en los últimos años, se incrementó la disputa bélica por el control territorial.

Nariño es un teatro de guerra monumental a donde confluyen numerosos combatientes irregulares. Las Farc tienen allí los frentes 2, 8, 13, 29, 48, 60 y 64, así como las columnas móviles Jacobo Arenas, Omar Rodríguez y Teófilo Forero. Por su parte, el Eln opera con los frentes Comuneros del Sur, Camilo Cienfuegos, Héroes de Sindagua, Mártires de Barbacoas y José Luis Cabrera.

Además, se constata la presencia de las Auc bajo nuevas denominaciones de sus bloques, organización paramilitar que, según fuentes de la Gobernación de Nariño, tienen allí por lo menos 2.000 hombres. Por su parte, las Fuerzas Armadas cuentan con por lo menos 7.000 hombres, que provienen de la Policía Nacional, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército.

Un drama social

A 40 minutos del casco urbano de Policarpa se encuentra el corregimiento de Restrepo. Son 40 minutos de viaje en carro entre pequeñas parcelas de matas de coca y una que otra platanera haciendo sombra. Por este camino transitan campesinos llevando grandes bultos de la hoja, recién cogida. Dos de ellos, Aurelio y Óscar, se afanan en empacar dos sacos.

“Vea pues como estamos. Aquí apurados por llevarnos la hoja. La cogimos biche antes de la erradicación. Pero esto ya ni sirve: la arroba la están pagando a 30.000 pesos, cuando hace unas semanas estaba a 90.000 pesos. Y la pasta, ni se diga, bajó de 2,5 millones a 1,4 millones el kilo”, explica Aurelio en tono de lamento.

En el caserío, Rosa llama la atención sobre el futuro de las tres madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que trabajan allí y de las 14 restantes en el resto del municipio: “Las mamás de los 24 niños que cuidamos aquí nos dijeron que ya sin hoja de coca no tendrán con qué pagar la cuota diaria de 5.000 pesos. Imagínese si podremos trabajar así”.

A cientos de kilómetros de distancia, en Ricaurte, sobre el eje vial Pasto-Tumaco, el drama social también es evidente. “Aquí se siembra en pequeñas cantidades y se combina con café y caña. Un diagnóstico de 2005 estableció que 180 familias dedican parte de sus parcelas a la siembra de la hoja como parte de su supervivencia”, dice una fuente de la

Personería local, quien advierte que erradicar sin programas de sustitución es fomentar la pobreza.

En Tumaco, líderes afrodescendientes están preocupados por los efectos del ilícito: “La gente –dicen– se dedicó a la coca y se perdió el cultivo de pancoger. Cambiaron la comida por televisores, neveras y motores. Hoy todo lo compran”.

Paradojas económicas

Fuentes de la Gobernación cuestionan el programa de erradicación; “además, son los militares los que están negociando con los campesinos. A la Gobernación poco la dejan hablar. Por erradicar cuatro hectáreas, los oficiales le dan a cada familia 80.000 pesos”.

Un campesino tumaqueño que asistió a una reunión con varios oficiales del Ejército para solicitar apoyo en programas agrarios sólo obtuvo como respuesta un no rotundo: “A nosotros no nos interesa la pobreza”, le dijo el general encargado del programa de fumigación en la región del Pacífico.

Pero si para unos la pobreza se acentúa, para otros las ganancias económicas, usufructuadas por los grupos paramilitares y sus socios, son notorias. En particular sobresale el corregimiento Llorente, de Tumaco. En cuatro años, el caserío pasó de ser un sitio de economía tradicional y punto de encuentro de los indígenas awá y los afrodescendientes a un centro cuya población flotante supera los 15.000 habitantes. Prostitutas, narcotraficantes y raspachines transitan por su larga calle, en la vía Tumaco-Pasto, una cadena sucesiva de cantinas, prostíbulos, galleras y boutiques.

Llorente, de claro dominio paramilitar, es clave para la exportación de la cocaína. Está a pocos kilómetros de los ríos Mataje y Mira; además, es paso directo al Pacífico y a la frontera con Ecuador.

La capital nariñense no se escapa al fenómeno. “Aquí se vienen construyendo hoteles lujosos por todas partes y los paramilitares impusieron los precios a unos topes irrisorios. Una noche en un hotel de esos vale 12.000 pesos”, confirma una fuente gubernamental, quien agrega que esos dineros ilícitos también se irrigan a través de casinos y diversas actividades comerciales.

Tal como lo definió un campesino afrodescendiente de uno de los consejos comunitarios de Tumaco: “no hay territorio que no haya sido golpeado por los cultivos ilícitos. Esa fuerza es tan poderosa, que pasa por encima de cualquiera”.

(*) Los nombres fueron modificados por razones de seguridad

SAMANIEGO, NARIÑO

Samaniego le apuesta a Pacto Local de Paz

En Samaniego se cansaron de estar en medio de la confrontación entre organizaciones guerrilleras, paramilitares y estatales, y decidieron apostarle a estrategias que promuevan el

derecho a la vida y el respeto al derecho internacional humanitario a través del Pacto Local de Paz, promovido por la actual administración municipal.

Por Juan Diego Restrepo

“El Pacto Local de Paz nos ha permitido recobrar la confianza de solidarizarnos para rechazar la propuesta de la violencia, que muchas veces no es contra la Fuerza Pública sino contra la población civil, que nada tiene que ver con el conflicto”, dice Segundo Taques, corregidor de Tanamá.

Y es que esta localidad del noroccidente de Nariño ha sido centro de disputa, puesto que es paso obligado de guerrillas y paramilitares que van y vienen entre el río Telembí, el municipio de Barbacoas y el Alto Patía, regiones que concentran grandes plantaciones de hoja de coca y producción de cocaína, cuyo transporte se facilita a través de las vías fluviales hacia el Pacífico.

Como resultado del Pacto Local de Paz, que oficialmente se aplica desde enero de 2004, entre los 63.000 habitantes de Samaniego el color naranja está de moda. Banderas de este color ondean en las partes altas de la localidad y en las principales edificaciones civiles como símbolo de la neutralidad activa que quieren impulsar para evitar que sean objetivos militares por parte de las guerrillas de las Farc y el ELN, y de las fuerzas paramilitares de las AUC.

En sendos comunicados enviados por escrito y en videos al alcalde Harold Montúfar entre julio y diciembre de 2004, tanto el ELN como las AUC expresaron su apoyo al Pacto Local de Paz; no obstante, el gobierno nacional, a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, ha rechazado varias solicitudes hechas por el mandatario local de autorizarle contactos directos con los grupos armados para fortalecer el proceso, con el argumento de que “el señor Presidente de la República ha considerado improcedente y riesgoso que se adelante dicha labor”, según dice el alcalde.

Los logros

“Ante los llamados que se han lanzado a los grupos armados ilegales, la respuesta ha sido efectiva en términos de violencia: en 2.004 se presentaron 62 muertes violentas; en 2005 la cifra se redujo a 32 muertes, y en los primeros cuatro meses de 2006 sólo va una muerte por arma de fuego; igualmente, los hostigamientos en el casco urbano disminuyeron y ninguno ha cobrado víctimas humanas”, dice James Ibarra, secretario de gobierno local.

Pese a que aún persisten demostraciones de fuerza, como la bomba que explotó el pasado 7 de abril en el barrio La Colina, que dejó destrozos en varias casas, la comunidad intenta sobreponerse y fortalecer el pacto a través de la participación en las acciones de gobierno.

Marcelo Martínez, secretario de Hacienda, sostiene que la gente ha comenzado a perder el miedo y aprendió a enfrentar el fenómeno de la violencia a través de la participación en el gobierno. “Estamos impulsando un modelo de gobierno basado en la participación

comunitaria. El programa básico son los cabildos populares, en los cuales distribuimos el presupuesto de inversión del municipio”.

Cada año se realizan 24 cabildos populares, uno por cada corregimiento de la localidad, en los cuales se definen las necesidades de las comunidades y los montos a invertir. En promedio, por año, se destinan 1.500 millones. “A pesar de las dificultades de la guerra, hacemos presencia en el sector rural con el propósito de construir gobierno participativo y poder político entre la gente”, reitera Martínez.

Señala el secretario de Gobierno que “hubo necesidad de plantear una propuesta de convivencia y paz para poder desarrollar nuestra propuesta. De lo contrario, no hubiéramos podido, puesto que allí donde hay actores armados hay trabas para el ejercicio de gobierno”, y agrega que el Pacto fue calificado en 2004 como una de las cinco experiencias más exitosas de gestión pública a nivel mundial, por encima de 150 procesos más, lo que avala la gestión realizada hasta el momento.

“Aquí lo que nos ha permitido seguir avanzando es simplemente el color naranja, el emblema que identifica nuestro Pacto Local de Paz”, dice Ibarra, quien confía que esta estrategia de convivencia permita mantener al municipio fuera de la confrontación bélica, lo que posibilitará la aplicación de diversos proyectos de desarrollo que, espera, contribuyan a mediano y largo plazo a superar los niveles de pobreza, que llegan al 90 por ciento.

RESPUESTA DEL GOBIERNO A LA PROBLEMÁTICA DE NARIÑO

“Son grupos al servicio del narcotráfico”: Ministerio del Interior

Como grupos al servicio del narcotráfico fueron calificados por el Ministerio del Interior los comandos armados ilegales que operan en Nariño y en otras regiones del país que se hacen pasar por organizaciones de autodefensa.

Bogotá

Jorge Alfredo Rodríguez, asesor del Ministerio del Interior y delegado del Programa de Reinserción de esta cartera de Gobierno en la Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia que lidera la Organización de Estados Americanos (OEA), advierte que esos grupos de delincuentes al servicio del narcotráfico tienen fuerte presencia en regiones como los Llanos, el Chocó y Nariño.

“Eso lo sabe el país, y también sabe que el Gobierno nacional está trabajando fuertemente en la desarticulación de esos grupos porque si nos descuidamos generarían un problema mayor. Lo que buscan es el reconocimiento en la opinión pública como grupos de autodefensa para tener una oportunidad de diálogo y, posteriormente, desmovilizarse, en un doble juego a través del cual quieren evitar la extradición”, explica Rodríguez.

El tema del departamento de Nariño es tan complejo que para conocer de primera mano de las autoridades lo que pasa se programó un consejo de seguridad para el pasado domingo, pero el mal tiempo impidió la llegada de los funcionarios de Bogotá, entre los que estaría el Ministro de la Defensa. La reunión sigue pendiente.

“El Gobierno nacional ha dado parte de la desestructuración de los grupos de autodefensa y ahora estamos en un trabajo profundo en las regiones verificando junto el Ministerio de Defensa y la Misión de apoyo al proceso de paz de la OEA el fenómeno del rearme y de algunas estructuras que no se desmovilizaron. Pero eso requiere de un trabajo casi científico en el terreno para poder establecer con responsabilidad las realidades”, precisa Rodríguez.

Sobre Nariño, la Misión de la OEA, en el sexto informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente, presentado en Washington el 1º de marzo de este año, anunció que fue posible verificar la existencia de un grupo armado ilegal de por lo menos 150 hombres, conocido como Mano Negra o Águilas Negras, con centro de operaciones en el corregimiento de El Palmar, municipio de Leiva y que se extiende a otras localidades, como El Rosario y Taminango.

Coincide esta información con un reporte que reposa en el Ministerio de la Defensa y la Oficina del Alto Comisionado de Paz que indica, con base en denuncias hechas en diversas regiones nariñenses, que en Nariño hay por lo menos una pequeña estructura del Bloque Libertadores del Sur que no se desmovilizaron y que hacían parte de la estructura que debió desmovilizarse el 30 de julio de 2005.

“El fenómeno de Nariño lo estamos verificando. Se habla de una estructura muy pequeña de autodefensa, de no más de 80 personas, y unos grupos fuertes que hacen presencia, pero que son netamente de narcotraficantes”, explica Rodríguez, quien advierte que una de las preocupaciones centrales de esta situación es que hubiesen en esos grupos desmovilizados que estuvieran gozando de los beneficios dados por el Estado.

No obstante, el Asesor del Ministerio del Interior aclara que el programa de reinserción en Nariño se desarrolló de manera normal: “Allí tenemos 152 beneficiarios ubicados en Pasto, Ipiales, Tumaco y Chachagüí, a quienes tenemos identificados plenamente y cubiertos por el régimen subsidiado de salud. El regreso de los reinsertados a sus lugares de origen genera sensacionalismo, los muchachos son estigmatizados, pero hay unos que tienen ciclos de capacitación y ocupación importantes. El compromiso de ellos es exigir sus derechos, pero también cumplir con sus obligaciones. Fuera de ese contexto, pierden todos sus beneficios”.